

Descorrer traslado de contestación de la demanda y excepciones - RAD: 865683189002-2024-00036-00.

Alejandro Galvis <juridicos.putumayo@gmail.com>

Jue 8/08/2024 4:54 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Putumayo - Puerto Asís <j02prctoautoasis@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (234 KB)

DESCORRER TRASLADO DE EXCEPCIONES - POWER OIL Y ADALVER ROMERO.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de juridicos.putumayo@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Puerto Asís (Putumayo), 8 de agosto de 2024

SEÑORES:

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO

Puerto Asís - Putumayo

E. S. D.

RAD: 865683189002-2024-00036-00.

REF: Descorrer traslado de contestación de la demanda y excepciones.

Respetada Sra. Juez

WILSON ALEJANDRO GALVIS ROSERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.754.707 expedida en Pasto (Nariño), abogado titulado y en ejercicio, apoderado de la parte actora en el caso de referencia, ante usted, respetuosamente remito escrito dentro del término de ley, donde me pronuncio frente a la contestación de la demanda y excepciones de mérito propuestas por la parte demandada **POWER OIL & GAS y ADALVER ROMERO CARRILLO**

Con respeto,

WILSON ALEJANDRO GALVIS ROSERO



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES.
VALLE DEL GUAMUEZ.

8 de agosto de 2024

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU DEL CIRCUITO

Puerto Asís - Putumayo

E. S. D.

RAD: 865683189002-2024-00036-00.

REF: Descorrer traslado de contestación de la demanda y excepciones.

Respetada Sra. Juez

WILSON ALEJANDRO GALVIS ROSERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.754.707 expedida en Pasto (Nariño), abogado titulado y en ejercicio, apoderado de la parte actora en el caso de referencia, ante usted, respetuosamente manifiesto que mediante el presente escrito y dentro del término de ley, me pronuncio frente a la contestación de la demanda y excepciones de mérito propuestas por la parte demandada POWER OIL & GAS y el señor Adalver Romero Carrillo.

FRENTE A LA OPOSICION A LAS PRETENSIONES:

La parte demandada realiza un vaga mención y sustentación de algunas excepciones, la mayoría son improcedentes y otras están llamadas a no prosperar por carecer de fundamento jurídico y factico. Se observa que parte demandada ha hecho mención a varias excepciones que versan sobre el mismo punto de oposición.

FRENTE A LA CONCURRENCIA DE CULPAS: Alega la parte demandada una concurrencia de culpas por cuanto el señor Gustavo Madrid Cabrales (Q.E.P.D) se transportaba a bordo de una motocicleta, es decir, desplegaba una actividad catalogada como peligrosa del mismo modo que el señor Adalver Romero Carrillo, quien para el momento del accidente, y que como fehacientemente se demostrará, iba conduciendo el camión de placas GDW-246 de propiedad de Power Oil & Gas, aquí demandada, sin embargo, al plantear tal excepción no ha tenido en cuenta lo esbozado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de 18 de diciembre de 2012, en donde determinó que en casos de similar naturaleza existe la necesidad de “valorar la equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas generadoras del daño, con el fin de establecer, a partir de la magnitud de esa injerencia, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los actores...”

Al respecto la solución que propone la jurisprudencia para determinar la responsabilidad ante la concurrencia de sendas actividades peligrosas, es evaluar la incidencia causal en la producción del resultado dañoso de cada una de las actividades puestas en marcha desde el terreno de la culpabilidad, situación que impone al juzgador el deber de analizar la conducta de los actores, para precisar su influencia en la causación del hecho y así la magnitud atribuible a cada parte para determinar el daño, la responsabilidad de uno y otro, y cuál de las dos actividades tuvo mayor magnitud para que se produjera el hecho indemnizable “su contribución o participación para mitigar o atenuar el deber de repararlo” (C.S.J. Sentencia adiada el 24 de agosto de 2009.) , lo que en efecto, repercutiría en la tasación de la condena.

Así la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “cuando un daño se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la víctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES. VALLE DEL GUAMUEZ.

ese caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas (...) más exactamente, la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre en favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación demanda” (CSJ. Cas. Civ. sent. de 26 de noviembre de 1999, exp. 5220, citada por CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL, .M.P.LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA SC5885-2016, 06 de Mayo de 2016.)

El caso que no ocupa, un accidente en donde lamentablemente una persona que se desplaza en su motocicleta, por su carril correcto, a una velocidad dentro de los límites establecidos y portando los elementos de seguridad exigidos por la norma colisiona con un camión que en cuanto a proporciones es evidentemente más grande, más robusto y mucho mas pesado, y que aunado a eso, invade el carril contrario, desatendiendo lo que en relación a eso establece la ley 769 de 2002 en su artículo 68 en donde dispone lo siguiente:

- **UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES.** Los vehículos transitarán de la siguiente forma:
Vías de doble sentido de tránsito.
De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.

Así las cosas, se logra evidenciar que el señor Adalver Romero habría aumentado significativamente el peligro o riesgo por el creado, i) por las características propias del vehículo en el cual se movilizaba y ii) habría incurrido en una infracción de tránsito al no utilizar únicamente su carril derecho, máxime cuando en el tramo donde ocurrió el accidente ni siquiera está permitido el adelantamiento.

Aunado a lo anterior, alega la parte demandada en su contestación en relación al hecho número 5 de la demanda que no es cierto “(...) *toda vez que, Gustavo Madrid Cabrales colisiono de frente contra el vehículo placas GDW-246, y en tal sentido, el impacto se dio con el costado de la parte lateral (media), trasera derecha. De igual modo, y contrario a lo manifestado por el extremo activo, el automotor de placas GDW-246, al momento del impacto, no venía en circulación por el sentido contrario; pues según lo precisa el conductor Romero Carrillo, el citado rodante ya se encontraba estacionado, habida cuenta de unos residuos de aceite que estaban esparcidos en la vía, siendo en ese momento en que Gustavo Madrid Cabrales, quien venia conduciendo un vehículo tipo motocicleta, a alta velocidad y sin portar los elementos de protección tal como el casco, procedió a adelantar a un camión tipo cisterna, en sector prohibido, encontrándose de frente con la parte lateral (media) trasera del vehículo placas GDW-246, causando el impacto.*”

Lo argumentado por la parte demandada no guarda ninguna consonancia con lo que el señor Adalver Romero Carrillo manifestó en entrevista rendida ante policía judicial, tomada por el agente de tránsito Pavel Rúales, misma que fue aportada como prueba documental con la demanda y de la cual se puede concluir sin mucho esfuerzo que en efecto, al momento de la colisión, el camión de placas GDW-246 si se encontraba en movimiento, versión que dista sustancialmente de lo que ahora manifiesta en la contestación, dejando entrever una clara intención de modificar su versión inicial de los hechos. Arguye la parte demandada que el señor Gustavo Madrid transitaba sin los elementos de protección exigidos por ley sin que aporte prueba conducente a que se verifique tal afirmación. No es claro cuando dice que el señor Gustavo Madrid “*colisiono de frente contra el vehículo placas GDW-246, y en tal sentido, el impacto se dio con el costado de la parte lateral (media), trasera derecha*”, pues no se entiende de qué manera el señor Gustavo Madrid podría haber



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES.
VALLE DEL GUAMUEZ.

colisionado de frente con la parte lateral (media), trasera derecha del camión si a voces del demandado supuestamente se encontraba estacionado y que en gracia de discusión, de haberlo estado, también habría violado flagrantemente los postulados de la Ley 769 de 2002 en lo que al tema respecta.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Viterbo, en un caso con características, señaló en una de sus providencias lo siguiente:

“(…) no puede convenirse que desaparece la presunción en contra de los demandados por el simple hecho de que el difunto se encontraba conduciendo una motocicleta, o que se presenta una concurrencia de culpas como lo pretende el recurrente, por cuanto es labor del juez realizar un parangón entre estas actividades y determinar cuál de ellas presenta un mayor grado de riesgo, y en qué medida este se ha creado, la potencialidad que comporta cada una de las actividades en movimiento, en qué forma ha contribuido cada una a la producción del accidente, circunstancias que al ser evaluadas en el sub lite, permiten colegir, sin duda alguna, que a pesar de presentarse en el caso concreto una concurrencia de actividades peligrosas, entre ellas no existe equivalencia o semejanza” (Sent. TSDJ de Viterbo – Sala única RAD. 157593103003201100063 01)

FRENTE A LA AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE ESTRUCTURAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El daño, entendido como ese elemento estructural y sobre el que se funda la responsabilidad civil y como la lesión o menoscabo de un derecho ajeno y/o de un interés legítimo, se tiene que el presente asunto se contrae a la determinación del daño irrogado por los aquí demandados, con ocasión a la muerte del Gustavo Madrid Cabrales, comoquiera que es un hecho cierto y que a diferencia de lo que los demandados pretenden hacer valer, se acredita plenamente con la inspección técnica a cadáver misma que fue aportada como prueba documental con la demanda inicial conjuntamente con el registro de defunción del occiso.

En relación al hecho como elemento estructurador de la responsabilidad, se tiene que de los documentos aportados con la demanda es posible determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, del mismo modo, se tiene plena identidad de las personas que intervinieron en el accidente, estableciendo que el señor Adalver Romero Carrillo era el conductor del camión de placas GDW-246, y que en consonancia con los hechos descritos en la demanda, desplegó una acción creando un riesgo que contribuyó de manera determinante con la producción del daño. De ahí que se pueda concluir que el hecho dañoso está plenamente acreditado con los medios de prueba obrantes en este proceso.

Frente al nexo de causalidad las pruebas aportadas al proceso permiten establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos en donde es evidente que pese a que ambos estaban incurriendo en una actividad peligrosa, el sujeto Adalver Romero Carrillo incremento el riesgo que le es inherente a dicha actividad traducido en el volumen y la potencia del vehículo que conducía, además de la infracción cometida por el mismo al invadir el carril contrario, lo que indefectiblemente nos permite establecer que la acción desplegada por el señor Adalver Romero Carrillo es la consecuencia del daño y los perjuicios que hoy se reclaman.

La parte demandada aduce que fue Gustavo Madrid Cabrales el causante del accidente que hoy nos ocupa y quien violó el deber objetivo de cuidado, actuando de manera imprudente, imperita, y poco diligente, sin el cumplimiento debido de las normas de tránsito exigidas en la conducción de motocicletas, sin embargo, de las pruebas que se han aportado con la demanda y de las que se pretenden practicar en audiencia no es factible llegar a tal conclusión, por el contrario, con ellas se logrará acreditar que no fue el señor Gustavo Madrid quien infringió flagrantemente



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES. VALLE DEL GUAMUEZ.

las normas contenidas en el Código de Tránsito, sino más bien, fue el conductor del vehículo de placas GDW-246 quien fue imperito y que violó el deber de cuidado exigido, máxime cuando es innegable que el riesgo creado con la circulación del camión que conducía para el día de los hechos, es ostensiblemente mayor al riesgo creado por una motocicleta, y que se espera de las personas que conducen ese tipo de vehículos pesados, mayor prudencia y pericia para evitar que sucesos como el que hoy nos convoca, sucedan.

Afirma la parte demandada que: *“la parte actora hace referencia a tales dichos de manera parcializada, pues obvia precisar que el señor HERNANDO LUPERCIO LEITON señaló que el conductor de la motocicleta de placas XTT24F adelantó el vehículo que esta venia conduciendo; lo que permite concluir el actuar imprudente que ejecuto el señor Madrid Cabrales, que conllevaron a que se presentara el accidente.”* Pierde de vista la parte demandada el hecho de que el Código de Tránsito en su artículo 68 faculta a los conductores de vehículos automotores para que estos puedan adelantar a otros siempre y cuando se cumpla con las exigencias que la misma norma establece, por lo que es totalmente falaz atribuirle al señor Gustavo Madrid un actuar imprudente cuando no se establece ni siquiera el tramo exacto en donde se hizo el rebaso ni tampoco si en el mismo era dable hacerlo sin que esto constituya una infracción de tránsito. En conclusión, el hecho de que el señor Gustavo Madrid haya adelantado al vehículo de placas WFV-187 no significa per se, que haya cometido un acto imprudente.

En el apartado “AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PRUEBA QUE LOGREN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE CULPA EN CABEZA DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACAS GDW-246” la parte demandada cimienta sus argumentos en torno a la siguiente premisa: *“la parte demandante fundamenta todas las valoraciones de culpa sobre el Informe de Accidentes de Tránsito elaborado en el lugar, fecha de los hechos. Informe que carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte demandante, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad o siquiera puede contener hipótesis de responsabilidad.”* Con relación a lo anterior es menester traer a colación lo que la Corte Constitucional ha establecido en ese sentido. En sentencia T475/18 se estableció que:

*“El artículo 144 inciso primero de la Ley 769 de 2002 establece que el informe policial de accidente de tránsito es un **informe descriptivo**, en el cual debe contener, entre otros, el estado de la vía, la huella de frenada, el grado de visibilidad, la colocación de los vehículos y la distancia, así como otros elementos que constarán en el croquis.*

La forma en que se levanta dicho informe fue regulado por las resoluciones 4040 de 2004 y 11268 de 2012, expedidas por el Ministerio de transporte. El artículo 4 de la Resolución 4040 de 2004, establece que el informe policial de accidente de tránsito no puede ser modificado por la autoridad competente, una vez aquel sea elaborado (integridad del informe); mientras que el artículo 5 de la Resolución 4040 de 2004 consagra que el Ministerio de Transporte deberá elaborar y adoptar un manual técnico para el diligenciamiento.

Dicho manual fue adoptado mediante la Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte. En la consideración tercera de la Resolución 11268 de 2012 se manifiesta que la función del Registro nacional de accidentes de tránsito (RANT), alimentada por los informes policiales de accidentes de tránsito, es constituir una herramienta que permita identificar claramente las hipótesis de las causas de accidentalidad. El registro de dichas hipótesis se hará conforme al manual de diligenciamiento, el cual establece tanto el procedimiento a seguir ante la ocurrencia de un accidente de tránsito como los aspectos que deben ser registrados en el informe –art. 6 de la Resolución 11268 de 2012-.



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES. VALLE DEL GUAMUEZ.

En el manual, por su parte, se indica que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso judicial para determinar la responsabilidad civil o penal. Por ello, el manual establece unos requisitos de criterio y unos formales para garantizar que el informe pueda ser tenido en cuenta en un proceso. Los primeros (de criterio) se entienden como la elaboración técnica, veraz, clara, completa y efectiva del informe policial de accidente de tránsito; mientras que los segundos (formales) hacen referencia a la elaboración del informe policial de accidente de tránsito con letra legible, sin tachones ni enmendaduras.

Debe tenerse en cuenta que el manual de diligenciamiento entiende por tecnicidad no el conocimiento especializado –profesional o técnico– que debe tener la autoridad, sino a un conjunto de criterios, tales como: a) apoyo en la experiencia –praxis– del agente; b) concentración al momento de diligenciamiento; c) atención y seguimiento al protocolo establecido en el manual.

El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba.(...) Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas.”

Así entonces, la parte demandante aduce erróneamente la intención con la que la prueba del informe policial de accidente de tránsito fue allegada al proceso, afirma de manera equivocada que el mentado informe carece de valor probatorio y que la parte activa lo ha aportado como un dictamen de responsabilidad o de contener hipótesis de responsabilidad, no obstante, otra es la óptica de la jurisprudencia, pues en la praxis, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de justicia han establecido de manera categórica que no existen errores al considerar el informe policial de accidente de tránsito como prueba, cuando aquel es analizado a través de una lógica basada en las reglas de experiencia.

Al respecto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de junio 2015 (SC 7978-2015), M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez, se dijo que: “(...) en relación con el caso objeto de estudio, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que no existe una restricción del valor probatorio de un croquis (propio del informe policial de accidente de tránsito) ni una tarifa legal para probar la ocurrencia de un hecho, sino que el croquis debe valorarse a partir de un sistema de apreciación racional. En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado ha valorado los informes policiales de accidente de tránsito en armonía con otras pruebas, para determinar la ocurrencia de hechos y las consecuencias que derivan de los mismos. Por ejemplo, en un caso sobre la muerte de un conductor en una vía de la vereda de Aguablanca (Floridablanca), se logró determinar la imprudencia del conductor gracias a la coincidencia entre el informe policial de accidente de tránsito, los testimonios rendidos en el proceso y otras pruebas.”

FRENTE A LA INEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE: Esta excepción es carente de sustento factico y jurídico, pues se limita a negar la existencia del lucro cesante apelando a que no hay prueba de que en efecto, la familia haya sufrido una mengua en su patrimonio como consecuencia del accidente y por supuesto, de la pérdida del proveedor de la familia, el señor Gustavo Madrid Cabrales. Se pasa por alto entonces el contrato laboral aportado con la demanda, el cual permite establecer, que el señor Madrid Cabrales se encontraba laborando al momento de su fallecimiento y que en consonancia con lo que las pruebas testimoniales que se pretenden practicar en el trámite del proceso, nos pueda aportar un panorama mucho más claro, en donde resulte factible probar la reducción del patrimonio de la



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES.
VALLE DEL GUAMUEZ.

familia como resultado del hecho que le cegó la vida y en el que se ven involucradas las partes demandadas en este proceso.

Es de anotar que el señor Madrid Cabrales se encontraba inmerso en una relación laboral, situación que por ser de carácter formal, es mucho más fácil de apreciar probatoriamente. La Corte Constitucional ha enfatizado en que el lucro cesante puede acreditarse hasta en los trabajos de carácter informal, en donde es tedioso establecer con exactitud lo devengado por el causante, y del mismo modo, establecer cual fue la mengua en el patrimonio de quien reclama la indemnización.

FRENTE A LA EXCEPCION DE COBRO DE LO NO DEBIDO: es improcedente, toda vez que no se está solicitando el cobro de nada que no se deba, todo lo contrario, se está solicitando las condenas a lo que en derecho corresponde, como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual deprecada en este proceso.

FRENTE A LA PRESCRIPCION, es improcedente, teniendo en cuenta que, NO HAY PRESCRIPCION en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, y no han transcurrido 5 años.

FRENTE A LAS OBJECCIONES DEL JURAMENTO ESTIMATORIO: Las partes demandadas proponen objeciones sobre el juramento estimatorio, argumentado que el mismo no cumple con lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del Proceso, frente a ello, sea lo primero señalar que, para la estimación de los perjuicios por lucro cesante, con ocasión del deceso del señor GUSTAVO ADOLFO MADRID CABRALES, se tomó como base el salario que devengaba el mencionado señor, en el cargo de vendedor externo para el establecimiento de comercio Agrodistribuidora AgroFinca AF, identificada con el NIT 1085327301-7, hasta el momento de su fallecimiento, el cual fue la suma de un millón de pesos moneda corriente (\$1.000.0000 M/Cte) mensuales, más los incrementos que este debe tener cada año y las bonificaciones a las que él podía acceder por ventas.

Tomando como base el salario antes indicado, se realizó la proyección del perjuicio causado a las hijas menores de edad del señor GUSTAVO ADOLFO MADRID CABRALES, en razón a su edad para el momento de su fallecimiento y hasta tanto cumplan los 25 años edad, teniendo en cuenta que, bajo la normatividad colombiana la responsabilidad de los padres hacia sus hijos se extiende hasta esta edad siempre y cuando se encuentren estudiando.

Para la menor de edad SHARA VALENTINA MADRID CERÓN, se estableció como lucro cesante VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO M/CTE (\$29.163.125), dado que al momento del fallecimiento de su padre contaba con catorce (14) años de edad.

Para la menor de edad MARIA JOSE MADRID CERÓN, se estableció como lucro cesante SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA M/CTE (\$71.522.890), quien al momento del fallecimiento de su padre tenía cuatro (4) años de edad.

Para la menor de edad ALISSON MADRID CERÓN, se determinó como lucro cesante NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA M/CTE (\$90.315.390), quien tenía al momento del fallecimiento de su padre 1 año de vida.

Por lo tanto, no está bien recibido los argumentos esgrimidos para proponer las objeciones, donde inicialmente se establece que no se presenta pruebas de que el señor GUSTAVO ADOLFO MADRID CABRALES, desarrollara alguna actividad económica de la cual percibiera sus ingresos, cuando con la demanda se presentó el contrato laboral a término indefinido, que tenía suscrito y vigente con el establecimiento de comercio Agrodistribuidora AgroFinca AF, es así que, en el



ASESORES JURIDICOS INTEGRALES.
VALLE DEL GUAMUEZ.

plenario se demuestra que el señor Madrid, ejercía una actividad laboral como vendedor externo, de donde provenían sus ingresos para su sustento y el de su familia que dependía económicamente de él.

De igual forma, no es aceptable el argumento de que no existe pruebas de que las menores de edad hoy demandante, dependieran económicamente de su padre, o que esté no les brindara apoyo económico, es algo totalmente ilógico, puesto que, son tres niñas con escasa edad, lo que hace imposible que puedan asumir la responsabilidad de su propia subsistencia, antes por el contrario son unas niñas que dependían económicamente de los ingresos percibidos por su padre, quien fue el responsable hasta el momento de su fallecimiento de brindar por el bienestar y cuidado de ellas.

En la sentencia C-919 de 2001, de la Honorable Corte Constitucional, se desarrolla en concepto de derecho alimentos así:

“El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien, por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos”

De acuerdo al concepto antes indicado, es evidente que a las menores de edad SHARA VALENTINA MADRID CERÓN, MARIA JOSE MADRID CERÓN y ALISSON MADRID CERÓN, son titulares de este derecho frente a su padre, quien hasta el momento de su fallecimiento cumplió perfectamente con su deber de alimentante.

En este orden de ideas, se considera que las objeciones propuestas, no cumplen con la explicación razonable de la inexactitud en el juramento estimatorio presentado, antes, por el contrario, los perjuicios por lucro cesante fueron debidamente tasados, haciendo la interpretación idónea para su estimación, de esta manera cumpliendo las exigencias previstas en el artículo 206 del C.G.P.

Atentamente,

Alejandro Galvis Rosero
ABOGADO ESPECIALIZADO
T.P. 169717 del C.S. J

WILSON ALEJANDRO GALVIS ROSERO

C.C 12.754.707 de Pasto (N)

T.P. 169717 del C.S. de la J.

Correo: juridicos_integrales@hotmail.com